



Industria limpia sí, pero competitiva

FÉLIX DE LAS CUEVAS

Diputado nacional por Cantabria del Partido Popular

Sin una planificación adecuada y sin inversiones suficientes, la transición energética puede convertirse en un freno para el desarrollo industrial

España necesita más industria. No es una consigna política ni una preferencia ideológica: es una necesidad económica. La industria genera empleo estable, impulsa la innovación y refuerza nuestra autonomía productiva en un mundo cada vez más incierto. Sin embargo, en los últimos años el debate industrial en Europa ha derivado con demasiada frecuencia hacia posiciones que olvidan una realidad básica: sin competitividad no hay transición ecológica posible.

Nuestro tejido industrial atraviesa un momento delicado. La combinación de costes energéticos elevados, presión regulatoria creciente y una competencia internacional cada vez más intensa ha erosionado la posición de muchas empresas. Esto es especialmente evidente en los sectores electrointensivos, que durante décadas han sido pilares de nuestra economía y que hoy afrontan un escenario de incertidumbre que no podemos ignorar.

Ante esta situación, surgen propuestas aparentemente sencillas: romper con el marco europeo, eliminar el mercado de emisiones o cuestionar compromisos internacionales. Son planteamientos que pueden resultar atractivos en el debate político, pero que no solucionan los problemas reales de nuestra industria. Más bien al contrario: generarían inseguridad jurídica en un momento en el que la inversión necesita estabilidad, previsibilidad y confianza.

La industria española está profundamente integrada en el mercado europeo. La mayor parte de nuestras exportaciones se dirigen a la Unión Europea y buena parte de la inversión industrial depende de ese marco común. Pretender fortalecer nuestra industria desde el aislamiento sería un error estratégico de primer orden. La alternativa no es la resignación, sino la reforma. Europa debe revisar aquellos elementos de su política industrial y energética que están

debilitando la competitividad de sus empresas. Y España debe liderar ese debate desde dentro, no desde fuera, defendiendo cambios realistas sin cuestionar nuestra pertenencia al proyecto común europeo.

En primer lugar, necesitamos una política industrial europea estable y previsible. Las decisiones de inversión se toman a largo plazo y requieren marcos regulatorios claros. Los cambios constantes o las normativas excesivamente complejas generan incertidumbre y frenan proyectos que podrían traducirse en empleo y crecimiento.

En segundo lugar, es imprescindible simplificar la normativa. Las empresas europeas soportan en muchos casos una carga burocrática que sus competidores internacionales no tienen. No se trata de rebajar estándares ambientales, sino de evitar duplicidades, agilizar procedimientos y permitir que las empresas dediquen sus recursos a innovar, producir y competir.

La energía es otro de los grandes retos. Una industria competitiva necesita energía competitiva. Apostar por las energías renovables es imprescindible, pero también lo es garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y mantener una verdadera neutralidad tecnológica. En este contexto, prolongar la vida útil de las centrales nucleares es una decisión pragmática que permite asegurar precios razonables y suministro estable mientras avanzamos hacia un modelo energético más limpio.

Además, es urgente acelerar las inversiones en infraestructuras eléctricas. Las redes de transporte y distribución son la base de la electrificación industrial. Sin una planificación adecuada y sin inversiones suficientes, la transición energética puede convertirse en un freno para el desarrollo industrial en lugar de un impulso.

En este sentido, el Gobierno de España debe escuchar al sector industrial y a las comunidades autónomas. Regiones como Cantabria demandan acceso a redes eléctricas

modernas, suficientes y adaptadas a las necesidades de nuevos proyectos industriales que pueden generar inversión, crecimiento y empleo.

Un elemento clave en este debate es el mercado europeo de emisiones de CO₂. Este sistema se diseñó para incentivar la reducción de emisiones de manera eficiente, pero su evolución reciente ha generado tensiones evidentes en determinados sectores. El problema no es su existencia, sino su funcionamiento.

Eliminarlo de forma unilateral no es viable. Pero sí es necesario reformarlo para evitar dinámicas especulativas y garantizar que cumple su objetivo ambiental sin poner en riesgo la competitividad industrial. Al mismo tiempo, Europa debe reforzar la defensa de su industria frente a prácticas comerciales desleales. No tiene sentido exigir a nuestras empresas estándares ambientales muy elevados si luego permitimos la entrada de productos de países que no cumplen esas mismas reglas. La transición ecológica es necesaria. Nadie discute la importancia de avanzar hacia una economía más sostenible. Pero hacerlo de espaldas a la realidad industrial sería un error que pagaríamos muy caro. Las políticas climáticas deben diseñarse para impulsar la innovación y la modernización, no para provocar deslocalizaciones o cierres de plantas.

España no tiene que elegir entre industria y sostenibilidad. Debe aspirar a ambas. Pero para lograrlo necesitamos pragmatismo, rigor y una visión estratégica que sitúe la competitividad en el centro de las decisiones.

Reindustrializar Europa es uno de los grandes desafíos de esta década. Si queremos afrontarlo con éxito, debemos abandonar los debates simplistas y apostar por soluciones realistas. Industria limpia, sí. Pero también fuerte, competitiva y capaz de generar prosperidad para las próximas generaciones.